

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

La creación del Bono Cultural Joven se ha contemplado en la disposición adicional centésima vigésima segunda de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que establece lo siguiente:

“1. Se crea el bono cultural joven, destinado a facilitar el acceso del público joven a la cultura.

2. Serán beneficiarios del bono aquellos jóvenes que cumplan 18 años durante el año 2022. El bono tendrá un importe máximo de 400 euros por beneficiario y se destinará a las actividades y productos culturales, tanto públicos como privados, que se determinen reglamentariamente.

3. El bono cultural se regirá por lo dispuesto en este artículo y en su normativa de desarrollo. Será de aplicación supletoria la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 1 de julio, en todo aquello no regulado por esta Ley.

4. Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que sean necesarias para la implementación del bono cultural joven.”

La finalidad del proyecto remitido es proceder al desarrollo reglamentario del Bono Cultural Joven, en cumplimiento de lo dispuesto en el citada disposición adicional centésima vigésima segunda de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos General del Estado para 2022, mediante el establecimiento de las bases reguladoras de las referidas subvenciones, a las que deberán atenerse las correspondientes convocatorias.

Con posterioridad, mediante sendas órdenes ministeriales, se aprobarán las correspondientes convocatorias, para el año 2022, para la adhesión de las entidades y el acceso de los jóvenes a las ayudas.

En relación con la tramitación de las ayudas, se establece la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la administración para todas las fases del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas. Igualmente se establece la obligación de tramitación electrónica de todo el procedimiento para las personas físicas que soliciten la adhesión al programa atendiendo a la actividad profesional que desarrollan.

Para la gestión del Bono Cultural Joven, será necesaria la colaboración de entidades que realizarán las funciones de colaborar en la gestión de las ayudas, control de la aplicación de las ayudas a las actividades subvencionables a través de la aplicación informática que sirva de soporte al programa, ser el cauce de relación con los beneficiarios y entidades para articular su adhesión y controlar el adecuado desarrollo de los compromisos adquiridos en virtud de la misma. Igualmente estas entidades serán las depositarias y distribuidoras de los fondos, colaborando en la verificación de los requisitos para la concesión y justificación de las ayudas y articulando los mecanismos de pago que permitan la ejecución de las ayudas concedidas. Las entidades colaboradoras contarán con la estructura y disponibilidad de recursos materiales, técnicos y humanos, así como con experiencia en gestión de fondos públicos, de manera que ofrezcan garantía de solvencia y eficacia en la gestión de este programa.

El texto remitido incluye un precepto específico relativo a la protección de datos de carácter personal, del siguiente tenor:

Artículo 14. Datos de carácter personal y confidencialidad

1. Los datos de carácter personal recogidos en el procedimiento serán tratados de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

2. El órgano responsable del tratamiento es la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte.

No obstante, se autoriza el tratamiento de los datos personales a aquellas entidades que colaboren con el Ministerio de Cultura y Deporte en la gestión del programa Bono Cultural Joven, con la única finalidad de realizar la tramitación administrativa que se derive de la citada gestión.

3. Asimismo, el deber de secreto y las limitaciones en su uso marcadas por la normativa serán aplicables a cualquier información a la que se pudiera tener acceso en la realización de actividades objeto de estas normas, salvo aquella información que deba ser pública según lo establecido en la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

I

En lo que a la materia de protección de datos personales se refiere, la norma a la que debe ajustarse el proyecto de real decreto sometido a consulta es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD en lo sucesivo) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo).

El primer aspecto que debe analizarse es el relativo al ámbito material de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD aplicado al tratamiento derivado de la aprobación y ejecución del real decreto sometido a informe.

Para ello, deben identificarse los sujetos cuyos datos que van a ser objeto de tratamiento, a los efectos de determinar si es de aplicación la normativa de protección de datos y en caso afirmativo, en qué medida o con qué intensidad debe aplicarse.

Por un lado, procederá el tratamiento de los beneficiarios de la subvención, teniendo tal consideración, conforme al artículo 11.1. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS en lo sucesivo), «[...] *la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.* [...]». A este respecto, la disposición adicional centésima vigésima segunda de la Ley 22/2021 indica claramente que «*Serán beneficiarios del bono aquellos jóvenes que cumplan 18 años durante el año 2022*».

El artículo 5 del proyecto desarrolla dicha previsión, incluyendo la necesidad de tener la nacionalidad española o residencia legal en España o ser solicitante de asilo, en los siguientes términos:

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas del Bono Cultural Joven las personas físicas que reúnan los requisitos siguientes:

- a) *Cumplir 18 años durante el año natural en el que se solicite la ayuda.*
- b) *Poseer la nacionalidad española o residencia legal en España.*

2. Podrán ser igualmente beneficiarias aquellas personas que sean solicitantes de asilo en España, que no cumplen los requisitos de nacionalidad y residencia exigidos en la letra b) del apartado anterior, mediante la presentación de la documentación acreditativa prevista en el

artículo 18.1.a) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

3. No se exigirá el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario, atendiendo a la naturaleza de la presente ayuda.

4. La adquisición de la condición de beneficiario de las ayudas del Bono Cultural Joven supone la aceptación de las condiciones del programa que se recogen en las presentes normas reguladoras y en la convocatoria de las ayudas.

Por consiguiente, los beneficiarios de las ayudas serán, en todo caso, personas físicas identificadas.

Por otro lado, se prevé, asimismo, el tratamiento de los datos de las entidades adheridas, en los términos previstos en el artículo 7 del proyecto, cuyo apartado 1 indica que *«Podrán obtener la condición de entidad adherida al Bono Cultural Joven aquellas personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, establecidas o que presten servicios en España y que, de forma profesional y habitual, ejerzan actividades de venta o puesta a disposición de productos, actividades y servicios culturales, en los términos previstos en el artículo 8».*

Por tanto, dichas entidades podrán ser personas físicas identificadas o personas jurídicas.

El RGPD extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos en su artículo 4.1 como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”*

En el Considerando 14 del RGPD se indica que (...)el presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto.(...)

Quedarían, en consecuencia, excluidas de su protección las entidades jurídicas que tengan la consideración de personas jurídicas. Sin embargo, el ámbito protector del RGPD se extiende a las personas físicas que las representan, al no establecer ninguna exclusión en este sentido, pues sus

datos personales deben ser tratados en las relaciones que aquellas establezcan con terceros.

En el caso que se plantea en el proyecto, incluso en el caso de que se trate de entidades adheridas que sean personas jurídicas, para la tramitación del procedimiento de adhesión deberán tratarse los datos de las personas físicas que legalmente las representen y formulen la correspondiente solicitud.

En cuanto a la existencia de tratamiento, el artículo 4.2 del RGPD considera como «tratamiento»: *cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción*; por lo tanto, la recogida de los datos personales de los beneficiarios y de las entidades adheridas y su utilización durante el procedimiento de gestión de la ayuda, se ha de considerar tratamiento de datos personales.

En consecuencia, el tratamiento de los datos personales de los beneficiarios así como de las entidades adheridas personas físicas y los representantes de las personas jurídicas debe someterse al RGPD y a la LOPDGDD.

II

El segundo aspecto objeto de análisis, es el relativo a la licitud del tratamiento de datos personales que se deriva del proyecto de real decreto sometido a informe.

Conforme a lo previsto en el RGPD, el tratamiento deberá encontrar cobertura en alguno de los supuestos previstos en artículo 6 para considerarse lícito (principio de licitud), y ser respetuoso con el resto de los principios recogidos en el artículo 5.

Establece el artículo 6.1 del RGPD que *“El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:*

- a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;*
- b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;*
- c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;*
- d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;*

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

En el presente caso, del citado artículo 6.1 del RGPD, interesan las condiciones comprendidas en las letras c) y e) que amparan los tratamientos de datos cuando el tratamiento es *necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento* o cuando el tratamiento es *necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento*.

El Considerando 45 del RGPD señala que “*Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, el tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.*”

Por su parte, el artículo 8 de la LOPDGDD, bajo la rúbrica “*Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos*” dispone lo siguiente:

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”

Llegados a este punto es preciso identificar al responsable del tratamiento para determinar la aplicación de la base jurídica prevista en la letra c) o la prevista en la letra e) del artículo 6.1 RGPD, es decir, procede analizar desde la perspectiva del responsable, si actúa al amparo de una obligación legal o si el tratamiento de datos es consecuencia del ejercicio de potestades públicas derivados de una competencia atribuida mediante ley. O si concurrirían ambas bases jurídicas.

El artículo 4.7 del RGPD considera «responsable del tratamiento» o «responsable»: *la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros;*

En el proyecto de real decreto, se identifica como órgano responsable del tratamiento a la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte (artículo 14). Esta previsión se corresponde y adecúa a las competencias que, en materia de gestión de las ayudas, se le atribuyen en los artículos 7 (resolución de adhesión) 10 (ordenación, instrucción y resolución de concesión del Bono Cultural joven) 13 (Inspección, incumplimiento y reintegro) y disposición adicional segunda (Competencia para la administración de los créditos destinados al Bono Cultural Joven).

Teniendo en cuenta lo anterior, y a los efectos de determinar si la base jurídica del tratamiento que se deriva de la aprobación y ejecución de la Orden sometida a informe, es la prevista en el apartado c) o la prevista en el apartado e) del artículo 6.1 del RGPD, procede citar lo recogido en el Informe 74/2019 de este Gabinete Jurídico que analiza la existencia de obligaciones en las normas que le son de aplicación a la administración pública en el ejercicio de sus funciones:

No obstante, a juicio de esta Agencia, deben deslindarse ambos conceptos, ya que no hacerlo así implicaría confundir, en la práctica totalidad de los casos de actuación de la Administración, ambas bases jurídicas.

Para ello, debe atenderse a una de las características esenciales de las potestades administrativa, que es la obligatoriedad de su ejercicio, y a la necesaria diferenciación de ese deber genérico de las obligaciones concretas que el ordenamiento jurídico pueda atribuir a la Administración.

Para ello debe partirse del concepto de obligación contenido en el artículo 1088 del Código Civil (“toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa”), siendo la primera fuente de las obligaciones la ley, según remarca el artículo 1089, añadiendo el artículo 1090 que “Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente libro”.

Dichas obligaciones legales, en el ámbito del derecho administrativo, suelen recaer en los administrados, aunque también pueden darse casos en que la ley atribuya obligaciones específicas a las Administraciones Públicas.

En este sentido, procede traer a colación las diferencias establecidas por García de Enterría entre los conceptos de potestad, derecho subjetivo, deber y obligación.

La potestad, especie del género común de los poderes jurídicos al que también pertenecen los derechos subjetivos, se define, por oposición a éstos, como una manifestación de la personalidad consistente en un poder efectivo, atribuido directamente por el ordenamiento, previo, por lo tanto, e independiente de toda relación jurídica concreta, y susceptible, por esa razón de desplegarse y actuar frente a círculos genéricos de personas, que, respecto del titular de dicho poder, se encuentra en una situación de sujeción. Se trata, pues, de un poder genérico, no referido a un sujeto en particular, ni a un objeto determinado, un poder, en fin, que sólo a través de su concreto ejercicio puede llegar a actualizarse y traducirse en un poder concreto, es decir, en un verdadero derecho subjetivo.

En virtud del principio de legalidad de la Administración, el ordenamiento atribuye potestades a la Administración, de modo que toda acción administrativa se presenta como el ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y, como consecuencia de este origen legal y no negocial, las potestades son inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Y si bien la figura de la potestad es capital para definir la posición jurídica de la Administración, no es exclusiva de ésta, puesto que los administrados también pueden resultar titulares de esta clase de poderes jurídicas, tanto en el ámbito del Derecho Privado como en la esfera del Derecho Público.

Por otro lado, deber y obligación son dos especies de un género común, los deberes en sentido amplio, en cuanto comportamientos, positivos o negativos, que se imponen a un sujeto en consideración a intereses que no son los suyos propios, sino los de otro sujeto distinto o los generales de la colectividad.

En unos casos, los deberes operan en direcciones genéricas, de forma que los gravados por ellos no tienen frente a sí un sujeto determinado que sea titular de un derecho subjetivo propiamente tal a exigir de ellos el comportamiento en que el deber consiste, sino, todo lo más, un poder destinado a actuar como garantía del efectivo cumplimiento del deber. En estos supuestos se habla de deberes en sentido estricto, que, al igual que las potestades, tienen su origen directamente en la norma y no en ninguna relación o negocio jurídico concreto. Otras veces, en cambio, la situación de deber se produce en el seno de una relación dada en estricta correlación con un derecho subjetivo de otro sujeto que es parte de dicha relación y que, en consecuencia, tiene el poder de exigir del sujeto gravado, so pena de responsabilidad, el efectivo cumplimiento del comportamiento previsto, en la medida en que ese comportamiento viene impuesto en el marco de la relación considerada en atención, precisamente, a los específicos intereses del titular

del derecho, reservándose para este caso de deberes específicos la denominación de obligación.

De ahí que, como concluye García de Enterría, entre el deber en sentido estricto y la obligación suele mediar, por lo tanto, un proceso de concreción semejante al que, con toda frecuencia, se produce entre la potestad y el derecho subjetivo, proceso que en este caso se resuelve en actos administrativos de accertamiento o fijación, que en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, precisan en relación a un sujeto determinado el deber genérico impuesto en la norma y el alcance concreto del comportamiento exigible al sujeto gravado. Y en todo caso, la articulación del contenido y alcance de los deberes exige una cobertura a nivel de Ley formal, y partiendo de esa cobertura legal, la imposición a los administrados de una conducta concreta constitutiva de un deber en sentido amplio se realiza a través de distintos instrumentos jurídicos: leyes y reglamentos, el contrato y el acto administrativo.

Pero nada obsta, tal y como se indicaba anteriormente, a que el ordenamiento jurídico imponga deberes a las Administraciones Públicas, como ocurre, por ejemplo, cuando la Administración como empleadora deba comunicar los datos de su personal laboral a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por ello, la base jurídica prevista en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD se aplicará en aquellos casos en los que una norma con rango de ley imponga a la Administración una obligación específica de dar, hacer o no hacer, que implique el tratamiento de datos de carácter personal, y diferente del deber jurídico genérico de la Administración de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye para servir con objetividad al interés público (artículo 103 de la Constitución).

En este sentido, encontramos diferentes preceptos legales en nuestro ordenamiento jurídico que imponen a la Administración obligaciones jurídicas concretas, como ocurre especialmente en la normativa financiera y presupuestaria. Asimismo, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en su artículo 30 una diferenciación entre obligaciones y deberes de la Administración tributaria. También existen supuestos de obligaciones legales en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (...)

(...)Por lo tanto, debe concluirse que la licitud de los tratamientos de datos de carácter personal que realice la DC encontrará su fundamento en la base jurídica del artículo 6.1.c) del RGPD (el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento) únicamente en aquellos casos en los que una norma con rango de ley imponga a la Administración una obligación específica de dar, hacer o no hacer, que implique el tratamiento de datos de carácter personal, y diferente del deber jurídico genérico de la Administración de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye para servir con objetividad al interés público. (...)

Por lo expuesto, el criterio que viene manteniendo esta Agencia con carácter general es que, el ejercicio de la *actividad de fomento* que subyace en la naturaleza jurídica de las subvenciones públicas, y en lo que aquí interesa, respecto del tratamiento de datos personales que se pueda derivar de las mismas, encuentra su base jurídica en el apartado e) del artículo 6 del RGPD, pues la puesta en funcionamiento de esa actividad de concesión de ayudas públicas no forma parte de una obligación concreta de la administración.

Es decir, no es exigible *ni por parte de los administrados* al amparo de un mandato legal concreto, de un lado o como contenido de un derecho subjetivo de otro, *ni por parte de otro poder público*, que la administración cree y conceda subvenciones en un determinado ámbito material y temporal. Sino que estamos ante una actividad de fomento que la administración pública puede llevar a cabo o no, todo ello de acuerdo con la planificación de su actividad económica de acuerdo con las competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye.

De este modo, el responsable del tratamiento no actúa al amparo de una obligación legal *strictu sensu*, sino que el tratamiento de datos es consecuencia del ejercicio de potestades públicas derivados de una competencia atribuida mediante ley.

Esa ausencia de obligación específica y concreta de hacer, es la que determinará que la base jurídica no sea *el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento*, y en cambio sea la indicada en el apartado e), en la medida en que el tratamiento de datos personales es *necesario para el cumplimiento una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento*, y la norma que atribuye el ejercicio de poder público, de acuerdo con el artículo 8.2 LOPDGDD es la habilitación que se encuentra en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la *Ley 2/1995 de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid* y en las normas que otorgan las correspondientes competencias administrativas.

No obstante, siendo ese el criterio general, en el presente caso la concesión de la ayuda ha sido expresamente prevista en una norma con rango de ley, la disposición adicional centésima vigésima segunda de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos General del Estado para 2022, que, como señala la Exposición de Motivos de la norma, se enmarca en el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de las industrias culturales y creativas de nuestro país, al tiempo que se fomenta el acceso de la ciudadanía a la cultura, que el Gobierno ha puesto en marcha con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la crisis sanitaria, económica y social generados por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19).

Por consiguiente, en el presenta caso, existe una obligación legal del Gobierno de *adoptar las medidas que sean necesarias para la implementación del bono cultural joven*, lo que implica que los tratamientos de datos personales que se realicen para dar cumplimiento a dicho mandato encontrarán su legitimación en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD, además de en la letra e) del mismo.

Por otro lado, se contempla un tratamiento específico, ya que si bien el texto no establece nada más allá de la obligación de las personas físicas de relacionarse electrónicamente con la administración para todas las fases del procedimiento, la MAIN, al analizar las cargas administrativas, contempla, en relación con la solicitudes de los beneficiarios, que *«en el caso de los solicitantes que tenga la nacionalidad española o residencia legal en España no será necesario que acompañen ningún documento. Únicamente los solicitantes de asilo en España deberán acompañar el Justificante de la solicitud de asilo efectuada ante el Ministerio del Interior»*.

Esta previsión está haciendo referencia al derecho de los interesados a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración, al cual se refiere el artículo 23.3. de la LGS, previsto actualmente en el artículo 28.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

En estos casos, el tratamiento encontraría su fundamento en la letra e) del artículo 6.1. del RGPD, admitiéndose el derecho de oposición salvo excepciones, de lo que deberá informarse oportunamente al afectado, tal y como se indicará posteriormente.

III

En cuanto al cumplimiento de los restantes principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, debe hacerse especial referencia, además del principio de licitud, al de *limitación de la finalidad* y de *minimización de datos*, recogidos en las letras b) y c), que indican que los “datos personales serán:

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

A este respecto, en relación con los beneficiarios, para la concesión de la ayuda únicamente resultaría necesario, del tenor del artículo 5, además de sus datos identificativos, la edad y la nacionalidad española o residencia legal en España o, en su caso, la solicitud de asilo. Para la acreditación de los gastos subvencionables, el artículo 11.3 prevé el tratamiento de los siguientes datos: nombre del comprador beneficiario, tipo de producto adquirido y título del mismo, así como número de factura emitida, su importe y fecha de emisión. Estos datos personales se estiman adecuados al principio de minimización, y deberán ser respetados en las correspondientes convocatorias y en la tramitación de los correspondientes procedimientos. Por el contrario, no resultaría necesario el tratamiento de los datos personales relativos al domicilio, ya que no se admite el envío a domicilio, y se prevé una tramitación íntegramente electrónica de forma obligatoria, aunque podría resultar necesario en el caso de que proceda la emisión de tarjeta física conforme al artículo 11.1. Si se considerara necesario el tratamiento de algún otro dato personal, siempre respetando el citado principio de minimización, debería recogerse en el texto del proyecto. En el caso de no recogerse, las correspondientes convocatorias deberán precisar los datos personales que deben recabarse conforme al citado principio de minimización, sin excederse de los que se deriven de la necesidad de acreditar los requisitos exigidos por las presentes bases.

Igual previsión se realiza en relación con las entidades adheridas, teniendo en cuenta que los datos personales que deberán tratarse serán los estrictamente necesarios para la acreditación de los requisitos que se señalan en el artículo 7.1.

Por otro lado, los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos despliegan sus efectos, igualmente respecto de los datos que puedan requerirse para el ejercicio de las potestades de inspección a las que se refiere el artículo 13 o el artículo 7.6.a), de modo que la documentación que la información y documentación que deban facilitar las entidades adheridas y los beneficiarios quedará limitada por la finalidad de fiscalización del destino de las ayudas, tal y como se recoge en los citados preceptos.

En relación con el principio de limitación de la finalidad, el mismo implica que los datos personales únicamente podrán ser tratados conforme a la finalidad para la que han sido recabados, no pudiendo ser tratados de manera incompatible con la misma. Así se recoge en el apartado 3 del artículo 14, que hace referencia a las limitaciones en el uso de la información establecidas por la normativa, si bien haciendo expresa referencia a los supuestos en que la información deba ser pública conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

A este respecto, si bien constituye un principio esencial en materia de subvenciones la publicidad (art. 8.3 a) LGS), la publicación de los datos del beneficiario habrá de estar sometida a la normativa de protección de datos, debiendo conciliarse ambos principios conforme a la previsión general contenida en el artículo 15 de la Ley 19/2013, aplicable asimismo a la publicidad activa conforme al artículo 5.3. Tal principio se recoge expresamente en el art. 20.8.b) LGS, para la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), debiendo procederse a dicha publicidad en los términos previstos por el artículo 7 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas cuyo apartado 5 ha introducido garantías específicas para conciliar los principios de publicidad y transparencia con la protección de datos de carácter personal:

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se publicarán, en los términos que en dicho artículo se expresan, las subvenciones concedidas. Cuando hayan de publicarse datos personales de los beneficiarios personas físicas, habrán de cumplirse en todo caso, los principios y la normativa de protección de datos, incluyendo la forma en que habrán de publicarse dichos datos personales identificadores del beneficiario. Los datos personales publicados serán exclusivamente los necesarios para el fin del tratamiento.

No obstante, no se publicarán las subvenciones o ayudas públicas concedidas a personas físicas cuando:

a) La información contenida en la BDNS o el propio objeto de la convocatoria proporcione información o datos especialmente protegidos de los beneficiarios o relativos a las categorías especiales de datos relacionados en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

b) La persona física se encuentre en una situación de protección especial que pueda verse agravada con la cesión o publicación de sus

datos personales, en particular, cuando sea víctima de violencia de género o de otras formas de violencia contra la mujer.

En el primer caso, el órgano convocante lo señalará expresamente en la convocatoria si así se ha previsto en las bases reguladoras.

En el segundo caso, el órgano convocante procederá a anonimizar la información que consta en la BDNS, de oficio o a instancia del interesado. Cuando la persona física sea víctima de violencia de género, se aplicará lo previsto en el protocolo de colaboración que se elabore de conformidad con la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Por otro lado, se recoge una previsión específica relacionada con el principio de limitación del plazo de conservación, que prevé el apartado e) del artículo 5 del RGPD, de modo que los datos personales serán «*mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);*

A este respecto, el artículo 7.6.d) prevé que las entidades adheridas tendrán la obligación de «*d) Conservar las facturas emitidas sobre productos o servicios subvencionados, así como los justificantes de pago correspondientes a las mismas para que puedan ser objeto de comprobación y control durante un plazo de cuatro años»*, plazo de cuatro años que se considera adecuado al coincidir con el previsto en el artículo 39 de la LGS respecto de la prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.

IV

Por otro lado, resulta indispensable identificar el papel que, desde la perspectiva de la normativa sobre protección de datos personales, van a ocupar los distintos sujetos que realicen tratamientos de datos de carácter personal. A este respecto, el real decreto proyectado identifica, correctamente, a la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte como responsable del tratamiento, tal y como ya se ha visto. Sin embargo, guarda silencio respecto

de la posición que ocupan las entidades colaboradoras y las entidades adheridas.

Respecto de las entidades colaboradoras, el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 14 señala lo siguiente:

No obstante, se autoriza el tratamiento de los datos personales a aquellas entidades que colaboren con el Ministerio de Cultura y Deporte en la gestión del programa Bono Cultural Joven, con la única finalidad de realizar la tramitación administrativa que se derive de la citada gestión.

Por su parte, el artículo 6 señala lo siguiente:

Artículo 6. Entidades colaboradoras.

1. Colaborarán en la gestión de las ayudas y adhesión de las entidades, la entrega y distribución de los fondos a los beneficiarios, la comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos para la adhesión y el otorgamiento de las ayudas y de las operaciones de venta, así como cualquier tarea que resulte imprescindible para la gestión del programa aquellas entidades, preferentemente de naturaleza pública, que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia y con las que se formalice el correspondiente instrumento de colaboración.

2. La gestión del programa se realizará a través de una plataforma tecnológica específica de las entidades colaboradoras.

3. En los instrumentos de formalización de la colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las entidades colaboradoras se regularán las condiciones y obligaciones de cada una de ellas.

4. La justificación de los pagos por las entidades colaboradoras ante el órgano concedente sobre el uso de los fondos se realizará en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la finalización del plazo de disfrute del Bono Cultural Joven, contemplado en la convocatoria.

Y el artículo 7.5. prevé:

5. Las ayudas se concederán, una vez realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades colaboradoras que se determinen, bajo el único criterio del orden de presentación de solicitudes, hasta que se agote el crédito presupuestario asignado a la convocatoria. Las resoluciones de concesión se adoptarán sin necesidad de que haya transcurrido la totalidad del plazo de presentación de solicitudes.

En relación con las entidades colaboradoras, el artículo 12 de la LGS dispone que:

Artículo 12. Entidades colaboradoras.

1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando **en nombre y por cuenta del órgano concedente** a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.

3. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán actuar como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades autónomas y corporaciones locales.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el tratamiento de datos personales que realicen las entidades colaboradoras en el ejercicio de las funciones que les asigna el proyecto de real decreto se realizará *en nombre y por cuenta del órgano concedente*, nos encontramos ante la figura del encargado del tratamiento, que el artículo 4.8) del RGPD define como «*la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento*».

Por lo tanto, en el instrumento de formalización de la colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las entidades colaboradoras al que se refiere el artículo 6.3. del proyecto deberá recogerse el contenido previsto en el artículo 28. 3. del RGPD. No obstante, dicho contenido podría recogerse en la

norma proyectada, como un anexo a la misma, en cuyo caso no sería necesario su inclusión en los correspondientes instrumentos.

En cuanto a las entidades adheridas, las mismas se definen en el artículo 7 del proyecto como aquellas personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, establecidas o que presten servicios en España y que, de forma profesional y habitual, ejerzan actividades de venta o puesta a disposición de productos, actividades y servicios culturales, en los términos previstos en el artículo 8, en el que se definen los gastos y actividades subvencionales, que serán la adquisición de los productos, servicios y actividades culturales recogidos en este apartado, realizada a través de las entidades adheridas al Bono Cultural Joven.

De este modo, para la adecuada gestión de las ayudas y la comprobación de la actividad subvencionada, resulta necesario que la adquisición se realice en dichas entidades adheridas, las cuales van a tener que tratar datos personales de los beneficiarios en virtud de las obligaciones que asumen como tales entidades adheridas y al objeto de justificar el destino de las ayudas, como son los datos a los que se refiere el artículo 11.3. ya citado: *«Las facturas y justificantes emitidos por las entidades adheridas deberán indicar el nombre del comprador beneficiario, tipo de producto adquirido y título del mismo, así como número de factura emitida, su importe y fecha de emisión»*. A este respecto, dicho precepto debe ponerse en relación con las previsiones del artículo 30 de la LGS, relativo a la justificación de las subvenciones públicas, cuyo apartado 3 dispone expresamente que *«Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente»*.

Por consiguiente, en el presente caso no consta que el tratamiento de dichos datos se realice por cuenta del Ministerio de Cultura y Deporte, sino que dicho tratamiento lo realizan las entidades adheridas como responsables del tratamiento en el ejercicio de su actividad mercantil, con el objeto de cumplir la obligación legal establecida en el artículo 30 de la LGS, al objeto de permitir la acreditación del gasto. A este respecto, sin perjuicio de los tratamientos de datos personales que puedan derivar del ejercicio de su actividad y del cumplimiento de sus propias obligaciones, como puedan ser las contables o fiscales, no se excluye la posibilidad de que los datos personales que obtenga como consecuencia de su condición de entidad adheridas puedan tratarse para sus propios fines, como expresamente se reconoce en el artículo 8.6 del proyecto, que prevé que las plataformas en línea puedan hacer ofertas comerciales a los beneficiarios para extender la suscripción más allá del tiempo máximo financiable con la ayuda. Por consiguiente, dichas entidades adheridas ostentarían la condición de responsables del tratamiento respecto de sus propios tratamientos de datos personales, sin perjuicio de la necesidad de

cumplir con las obligaciones específicas que les impone su adhesión y las genéricas establecidas en la LGS, singularmente el deber de colaboración contemplado en su artículo 46.

V

Por otro lado, procede hacer referencia a la plataforma tecnológica a través de la cual se gestionarán las ayudas, y respecto de las cuales se ofrece escasa información en el texto remitido, sin que la MAIN ofrezca información adicional al respecto.

Conforme al artículo 6.2. del proyecto *«La gestión del programa se realizará a través de una plataforma tecnológica específica de las entidades colaboradoras»*; el artículo 7, en su apartado 2, prevé que *«Los interesados en adquirir la condición de entidad adherida al Bono Cultural Joven deberán solicitar su adhesión en los términos y plazos que se establezcan en la correspondiente convocatoria, a través de la plataforma tecnológica específica para la gestión del Bono Cultural Joven»* y en su apartado 6.e) incluye entre las obligaciones de las entidades adheridas la de *«Utilizar la plataforma informática que se implante para la gestión del Bono Cultural Joven y custodiar con diligencia sus claves de acceso a fin de evitar un uso indebido, comprometiéndose en particular a no facilitárselas a terceras personas»*; el artículo 10.3, al regular el procedimiento de concesión del Bono Cultural Joven, prevé que *«Las solicitudes se presentarán en la forma y el plazo que establezca la correspondiente convocatoria, a través de la aplicación informática específica para la gestión del Bono Cultural Joven, y se tramitarán siguiendo el orden riguroso de presentación»*, al tiempo que en su apartado 8 señala que *«Teniendo en cuenta las características del colectivo de personas físicas que pueden participar en este procedimiento y teniendo en cuenta que el pago de las ayudas del Bono Cultural Joven ha de realizarse a través de una aplicación informática creada al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento»*. Idéntica previsión se contiene respecto de las entidades adheridas en el artículo 7.5 del proyecto: *«Teniendo en cuenta las características de las entidades que podrán solicitar la adhesión al programa y que la gestión de éste se realizará a través de una aplicación informática, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento»*.

Por consiguiente, de dichos preceptos resulta que toda la gestión de las ayudas se va a realizar a través de una aplicación informática creada al efecto, a la cual tendrán que acceder las entidades colaboradoras, el Gabinete Técnico de la Subsecretaría, la Subsecretaría y las entidades adheridas. No obstante

no queda claro quién va a desarrollar dicha aplicación informática, si los servicios técnicos del Ministerio de Cultura y Deporte para ponerla a disposición de todos los intervinientes o, como parece deducirse del artículo 6.2., las entidades colaboradoras, desconociéndose, en el supuesto de que intervengan varias, si serán varias las plataformas que estén interconectadas o si será una sola y, en este último caso, cuál de las entidades colaboradoras la va a desarrollar.

Por otro lado, incluso en el caso de que se trate de una plataforma desarrollada por las entidades colaboradoras en su condición de encargadas del tratamiento, quienes asumirán sus propias responsabilidades al amparo del RGPD, como pueden ser las relativas a adoptar las medidas de seguridad necesarias conforme al artículo 32 del RGPD, no por ello se excluye la responsabilidad del responsable del tratamiento, en el presente caso el Ministerio de Cultura y Deporte, quien debe elegir únicamente *«un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado»* (artículo 28.1. del RGPD) y debe velar porque el encargado cumple con sus obligaciones, a cuyo efecto éste *«pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable»* (artículo 28.3.h) del RGPD).

Por todo ello, esta Agencia considera necesario que en la MAIN se clarifique si se va a tratar de una plataforma única o de varios sistemas interconectados y quién o quienes van a ser responsables de su desarrollo.

Asimismo, en virtud del principio de responsabilidad proactiva, deberá tenerse en cuenta la necesidad de realizar el análisis de riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas que exige el artículo 24 del RGPD, atendiendo a los principios de privacidad por defecto y desde el diseño contemplado en el artículo 25 del RGPD y, en su caso, la necesidad de realizar una EIPD conforme al artículo 35, al objeto de identificar las medidas de seguridad a implantar conforme al artículo 32 del RGPD, teniendo en cuenta que las medidas a implantar como consecuencia del citado análisis de riesgos prevalecerán sobre cualquier otra. Asimismo, dichas medidas deberán revisarse y actualizarse cuando sea necesario, lo que ocurrirá en cualquier momento en que se tenga conocimiento de que las mismas no son adecuadas o no son suficientes, como puede ser cuando se tenga conocimiento de vulnerabilidades que puedan dar lugar a brechas de seguridad y para las que no haya solución en ese momento, o por modificaciones en el contexto, los procedimientos organizativos o por los avances tecnológicos. Por esa misma razón, debería contemplarse el establecimiento de auditorías de privacidad y revisión continua de las medidas de privacidad encaminadas a la mejora continua del cumplimiento normativo en materia de protección de datos y a la

implantación de las medidas correctoras necesarias para mejorar la seguridad de los datos personales. Se trata, en definitiva, de adoptar un modelo de gestión continua del riesgo, tal y como viene manteniendo esta Agencia.

Asimismo, en los casos de producirse una brecha de seguridad que afecten a datos personales, deberá notificarse a esta Agencia sin dilación indebida, en los términos previstos en el artículo 33 del RGPD.

VI

Para concluir, procede hacer referencia al principio relativo a la transparencia en el tratamiento de datos y el derecho a la información.

Determina el artículo 12 del RGPD en su apartado 1, lo siguiente:

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

El artículo 12 del RGPD regula de qué modo o manera se debe proporcionar la información, es decir, qué características o cualidades debe tener la información que se ofrece a los titulares de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Determina el artículo 13 del RGPD en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;*
- d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;*

e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Como puede observarse, el precepto muestra el contenido material de la información. Es decir, qué elementos debe contener la información que se ofrezca al titular de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 11, bajo la rúbrica “Transparencia e información al afectado” determina lo siguiente:

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el

apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

El artículo 11 de la LOPDGDD, establece la posibilidad de instaurar un *sistema de información por capas*, diferenciando una primera información básica y permitiendo la remisión a otro espacio informativo dónde el interesado que lo desee pueda consultar con más amplitud todo lo relativo al tratamiento de sus datos personales.

Estas previsiones deberán tenerse en cuenta en la correspondiente Orden de convocatoria de las ayudas, de modo que contenga la información correspondiente para dar cumplimiento a dichos preceptos.

VII

En virtud de lo manifestado a lo largo del presente informe, esta Agencia valora positivamente la inclusión de un precepto específico referido a la protección de datos personales, si bien considera necesario que se introduzcan las modificaciones correspondientes para recoger lo indicado a lo largo del mismo, singularmente las siguientes:

- 1) Incluir en su apartado 1 la referencia al RGPD, en cuanto norma que regula directamente los tratamientos de datos personales, con carácter previo a la cita de la LOPDGDD, que se limita a completar aquél en los términos que el mismo permite.
- 2) Incluir en el apartado 2, párrafo segundo, la consideración de las entidades colaboradoras como encargadas del tratamiento.
- 3) Incluir un apartado específico relativo a la plataforma informática, en el que se haga referencia a quién la desarrollará y a la necesidad de

adoptar, previo análisis de los riesgos del tratamiento de datos personales para los derechos y libertades de las personas físicas, las medidas de seguridad apropiadas derivadas de dicho análisis.